

Capítulo 3. Conflicto armado en Colombia

3.1. Aspectos históricos del conflicto

Los orígenes de la lucha armada en Colombia se remontan a finales de la década de los 50, periodo a partir del cual la reconocida lucha bipartidista por el poder político fue generando toda una serie de dinámicas que propiciaron que esta lucha poco a poco se fuera tornando subversiva. Según el Grupo de Memoria Histórica [GMH] (2013), es posible clasificar la evolución del conflicto armado en Colombia en cuatro etapas, en las cuales las dinámicas han fluctuado de acuerdo con sus protagonistas y el entorno político, económico y social. El primer periodo comprende los finales de la década de los 50 e inicios de los 80, donde la dinámica se centró en la transición de una violencia de carácter bipartidista (partido liberal vs. partido conservador) hacia una violencia de carácter subversivo (grupos armados con diferentes niveles de organización); la segunda etapa comprende hasta mediados de la década de los 90, periodo en el cual los grupos armados empiezan a evidenciar un grado mayor de organización, mayores niveles de expansión territorial y un crecimiento notorio en su aparato militar, lo cual a su vez desembocó en la creación de nuevos grupos como los paramilitares.

La tercera etapa comprende hasta mediados del 2005 y abarca lo referente al recrudecimiento del conflicto en el país, el cual se caracterizó por una mayor expansión territorial de estos grupos, además del aumento en las cifras correspondientes a la cuantía y periodicidad de los eventos terroristas, así como el número de víctimas en sus diferentes categorías. La cuarta etapa que corresponde hasta mediados del año 2012 abarca lo correspondiente al cambio en la dinámica del conflicto en el país, etapa a partir de la cual el Estado empieza a tener una participación notoria por medio fortalecimiento del aparato militar, lo cual se vio reflejada en la recuperación de algunos territorios y debilitamiento paulatino de algunos frentes y el cambio de estrategia en el accionar de los diferentes grupos. Por otro lado, es posible añadir una quinta etapa que abarca desde el final de la anterior hasta la actualidad, la cual ha abarcado cambios significativos en el rumbo del conflicto interno colombiano, dicho periodo ha comprendido el inicio de las negociaciones de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, las cuales desembocaron en la firma de un acuerdo en el año 2016, a partir del cual se dio paso a una nueva etapa en el desarrollo político, económico y social del país: el posconflicto.

La lucha armada en Colombia procede de periodos de alta tensión política y social, a lo largo de la década de los 50 y mediados de los 60 el panorama estuvo caracterizado por un alto nivel de intolerancia y vehemencia (muchos autores han denominado esta etapa como “La Violencia”). Durante este periodo se produjo un número considerable de decesos a causa de la lucha entre los miembros de los partidos tradicionales (liberales y conservadores), todo lo cual desembocó en una posterior conformación de grupos armados, lo cual puede entenderse como una mutación del conflicto político que profundizó la dinámica de violencia que se tradujo en alrededor de 180.000 asesinatos, que dejó pérdidas humanas bastante considerables para un territorio que contaba con una población total que oscilaba alrededor de trece millones de habitantes (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2003).

En ese orden de ideas, según el GMH (2013) este proceso de recrudescimiento de la violencia al darse el paso a la vía armada trajo consecuencias que trascendieron la esfera política y pasaron a tener efectos económicos considerables; a raíz de esto, el mandatario de la época, Gustavo Rojas Pinilla (movido por la influencia de las élites que estaban viendo afectadas sus actividades económicas), dio paso a una propuesta de amnistía a los diferentes grupos armados y posterior despliegue del aparato militar contra aquellos que no se acogieran a dicha propuesta, lo cual incentivó a los grupos que se mantuvieran en su posición de rebelión, transformarse en guerrillas revolucionarias y profundizar la dinámica de violencia.

Así, con el fin de apaciguar el panorama nacional, entre los años 1958 y 1974 las directrices de los partidos políticos llegaron a un acuerdo por medio del cual se repartieron el poder por periodos, conocido como el Frente Nacional, cuya finalidad era disminuir el conflicto entre partidos, especialmente en épocas de elecciones. Sin embargo, dicho plan se vio entorpecido por la percepción de exclusión que tuvieron diferentes sectores de la población, además de la llegada de diferentes ideologías que promovían la conformación de grupos al margen; en ese sentido “el surgimiento de la guerrilla aparece como corolario de un problema delincuencia, la lucha de las clases populares, la resistencia a un conflicto agrario y la desigualdad política y económica experimentada en el país” (Bernal y Moya, 2018, p. 86).

Durante la década de los 60 se dieron diferentes acontecimientos de orden político que se basaron en la promoción de la pacificación en el país. Alberto Lleras Camargo por medio de la asesoría del Gobierno estadounidense pudo reconocer, de manera precisa, las condiciones del conflicto en el país, a raíz de lo cual propuso un plan de acción de dos fases: primero, atacar de manera directa a las diferentes fuerzas armadas y, posteriormente, emprender

diferentes reestructuraciones de carácter económico y social, con el fin de minimizar los riesgos de un resurgimiento de este tipo de violencia. Sin embargo, debido a la marginalidad del campo no fue posible llevar a cabo la segunda propuesta, razón por la cual la vía armada tomó más fuerza y resultó promoviendo aún más la lucha armada de la contraparte, a través de la conformación de “Repúblicas independientes”, la divulgación de la ideología comunista y el surgimiento de grupos guerrilleros más consolidados. En primer lugar, surge el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1962, luego, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1965, después de dos años surge el Ejército Popular de Liberación (EPL) y, a mediados de 1974 y 1975, surgen el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) (Bernal y Moya, 2018).

Por su parte, según el GMH (2013) el EPL fue uno de los grupos armados más campesinos que existió, sus operaciones se concentraron en los territorios pertenecientes al departamento de Córdoba (alto Sinú y alto San Jorge) y su lucha estuvo ligada a los movimientos agrarios emergentes y a las Juntas Patrióticas Populares como formas de obtener poder e influencia (p. 126).

La década de los 70 estuvo caracterizada por un desarrollo de los grupos armados en segundo plano, en esta época predominaron todo tipo de confrontaciones entre los diferentes grupos debido a la falta de consenso en las cadenas de mando, lo cual iba en contravía al crecimiento de los militantes de cada grupo y ralentizó los procesos de colonización hacia otros territorios que resultaban ser estratégicos, bien por las tradiciones de cada zona (políticas y armadas), la existencia de formas de organización en contra del accionar estatal (existencia de sindicatos, zonas marginales y pobres) y condiciones geográficas que fueran de difícil acceso para las fuerzas estatales y les permitiera transitar sin contratiempos.

En la década de 1980 se da inicio a una fase en la que toman mayor impulso los grupos de autodefensa que más adelante se conocerían como paramilitares, el hecho más representativo de dicha índole fue el surgimiento del grupo que se hizo llamar Muerte a Secuestradores (MAS), que surgió en Cali como resultado del secuestro de la guerrilla del M-19 a Martha Nieves Ochoa, hermana de dos importantes miembros del cartel de Medellín.

Para esta época, las FARC consolidaron diferentes asentamientos y profundizaron existentes, dentro de los cuales se destacan: el Bloque Oriental, que ocupó las regiones del Meta, Guaviare, Guainía, Caquetá; el Frente IV que fue muy amplio y se asentó en las regiones de Puerto Boyacá, Cimitarra, Landázuri, San Vicente del Chucurí, Yondó, bajo Cauca antioqueño (corredor

de paso hacia el sur de Córdoba y Urabá), sur del Cesar (de Ocaña hacia la región del Catatumbo y norte del Cesar), Magdalena (entre la ciénaga grande y la Sierra Nevada de Santa Marta). Por otro lado, el Bloque Sur se ubicó en las cordilleras del Tolima, la mayoría de municipios del Huila, algunos municipios del Valle, en el Cauca, en el norte de Putumayo y Nariño; así mismo, a raíz de los yacimientos petrolíferos de Cusiana y Caño Limón en el año de 1982 se ubicaron en territorios de Arauca y Casanare y, también resultaron ser estratégicos los territorios de Cundinamarca, Boyacá, la región andina central, fronteras con el Magdalena medio y con los llanos orientales, además se ubicaron en territorios circundantes al páramo de Sumapaz y parte del distrito capital de Bogotá. Por su parte, el ELN consolidó su influencia en el nororiente del país y la costa Atlántica promoviendo la construcción del poder en lo local (PNUD 2003).

La década de 1990 inicia en un panorama de desconfianza hacia las fuerzas militares como resultado del asesinato de los miembros de la Unión Patriótica (UP) y, sumado a ello, el asesinato de Carlos Pizarro en 1990 (dirigente del M-19 y candidato presidencial de la época). Sin embargo, también inicia con procesos de paz que culminaron de manera exitosa; el M-19 entregó las armas el 9 de marzo de 1990 y el 15 de febrero de 1991 lo hace el EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) el 25 de enero y el Quintín Lame el 31 de mayo (Bernal y Moya, 2018).

Con la expedición de la Constitución de 1991 se aprobaron diferentes medidas que impactaron de manera considerable al país, en primer lugar, se dio inicio a una fase de apertura económica que afectó a la población campesina por la baja competitividad que tenían sus productos en un mercado internacional. En segundo lugar, se dio paso a la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, en búsqueda de dar solución al problema agrario en el país y se prohibió la extradición de ciudadanos colombianos al exterior, que supuso un nivel de protección a las organizaciones criminales.

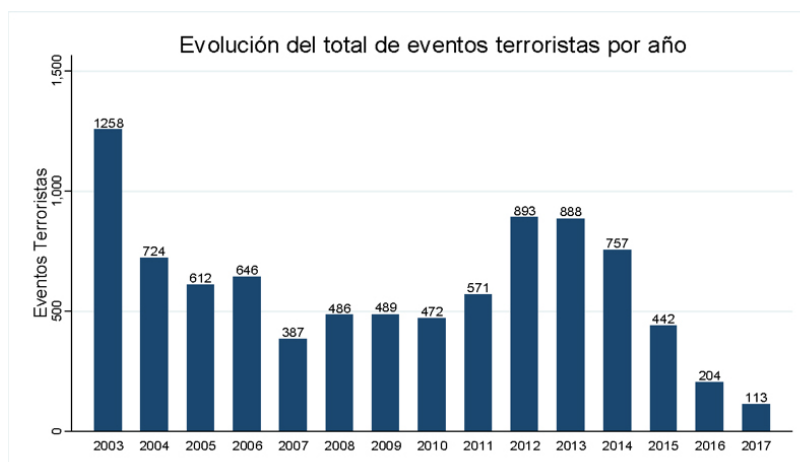
A pesar de que las diferentes propuestas (como la reforma agraria) se encontraban bien encaminadas, vieron prontamente el fracaso debido a la incapacidad del Estado para subsidiar al área rural y la constante inconformidad entre los propietarios de tierras y la población campesina, lo cual desembocó nuevamente en el abandono estatal de dicho sector poblacional; todo lo cual propició de nuevo el auge del narcotráfico, los cultivos ilícitos y la cultura de ilegalidad, precedente de la década anterior. En ese sentido, se dio un cruce entre las actividades paramilitares, el narcotráfico y el conflicto armado, cuyos intereses confluyeron en proteger sus patrimonios, expandir sus negocios ilegales, protegerse de extorsiones

y evitar encuentros con las fuerzas militares. Como resultado de dicha dinámica, surge el narcoparamilitarismo como una manera de interpretar la inserción de las actividades de narcotráfico en el conflicto bien fuera como fuente de financiación o bien como la organización de grupos armados para proteger la realización de dichas actividades; así, los cultivos de coca empezaron a tomar protagonismo en territorios de la región andina (tradicionalmente cafeteros), el suroccidente del país; además se incrementaron las áreas sembradas en el suroriente, noroccidente, nororiente y la costa Caribe del país (GMH, 2013, p. 153).

A finales de la década de 1990, el Gobierno nacional en cabeza del presidente Andrés Pastrana decide emprender nuevamente un proceso de negociación con la guerrilla de las FARC, el cual no tuvo resultados positivos, en razón del descontento del grupo guerrillero por la participación de excombatientes de los demás grupos en la consolidación de la Constitución de 1991. Según el PNUD (2003), a lo largo de esa década el accionar de las FARC se centró en los territorios de La Uribe (Meta), el Magdalena medio (Santander, Antioquia y la zona sur de los departamentos de Bolívar y Cesar), el departamento de Córdoba, Urabá, el noroccidente antioqueño, la unión entre los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y la zona oriental de la cordillera Oriental. A mediados de la década el accionar se mantuvo en la zona norte del Chocó, Urabá, norte del Cesar, el departamento del Magdalena, Norte de Santander, Arauca; un accionar poco notorio en la región del Amazonas y un aumento paulatino de la presencia en la periferia del Meta, el Caquetá, el Putumayo y el Guaviare.

Durante el siglo XXI los ataques perpetrados por los diferentes grupos armados han tenido una tendencia a la baja, sin embargo, para algunos periodos han incrementado. Entre 2003 y 2017, las diferentes políticas y mandatos de los distintos Gobiernos explican en gran medida el comportamiento de los ataques terroristas. En la *Figura 3.1*, se presenta la evolución del total de eventos terroristas por año entre 2003-2017. En primer lugar, se aprecia una disminución entre 2003 y 2007, el cual puede ser explicado principalmente por el Gobierno de turno, el cual era encabezado por el expresidente Álvaro Uribe; quien creó una serie de políticas basadas en la recuperación del control militar en el territorio. La más importante de estas fue la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) cuyo objetivo general era “reforzar y garantizar el Estado de Derecho en todo el territorio mediante el fortalecimiento de la autoridad democrática...” (Ministerio de Defensa Nacional, 2003, p. 12, citado en Andrade, 2014).

Figura 3.1. *Evolución del total de eventos terroristas por año entre 2003-2017*



Fuente: Elaboración propia con base en información del panel de datos del CEDE.

Para lograr el objetivo, se debía actuar contra seis (6) grandes problemas que amenazaban la seguridad de los ciudadanos, los cuales constaban de: terrorismo, el negocio de las drogas ilícitas; las finanzas ilícitas; el tráfico de armas, municiones y explosivos; el secuestro y la extorsión; y el homicidio. Conjuntamente, el expresidente Uribe declaró el Estado de Conmoción Interior (Decreto 1837 de 2002) para que el ejecutivo pudiera tomar las medidas necesarias para afrontar la crítica situación de inseguridad que sufría el país como resultado de “la acción de bandas armadas, organizadas y financiadas al amparo del lucro gigantesco que les proporciona su participación directa y creciente en los delitos del narcotráfico, el secuestro y la extorsión” (Andrade, 2014).

Además de eso el Gobierno promulgó el Estatuto Antiterrorista (Acto legislativo 2 de 2003). Modificando los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución, este permitía interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada y realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin previa orden judicial. Otra medida tomada por el Gobierno de turno fue la Ley 1121 de 2006 que legalizó como delito la financiación del terrorismo y la administración de recursos provenientes de actividades terroristas.

Ya para el segundo mandato del expresidente Uribe, se formalizó la Política de Consolidación de la Seguridad Democrática (PCSD). Está definió cinco objetivos estratégicos: consolidar el control territorial y restablecer la autoridad del Estado en todo el territorio nacional; proteger a la población, manteniendo la iniciativa estratégica en contra de todas las amenazas a la seguridad de los ciudadanos; elevar drásticamente los costos de desarrollar

la actividad del narcotráfico en Colombia; mantener una Fuerza Pública legítima, moderna y eficaz, que cuente con la confianza y el apoyo de la población; y conservar la tendencia decreciente de todos los indicadores de criminalidad en los centros urbanos del país.

En ese orden de ideas, se debe considerar que el conjunto de medidas y políticas establecidas en materia de seguridad democrática, desencadenaron dinámicas particulares en relación con el conflicto armado entre los años 2008 y 2012. Según Prieto et al. (2014), como resultado del superior dominio militar ejercido por parte del Estado en periodos anteriores, en 2008 se registró un número moderado de municipios afectados por el conflicto en comparación de los periodos en los que la violencia estuvo en auge. Sin embargo, estas políticas no conservaron esta tendencia por mucho tiempo.

En 2009, se evidenció un aumento en este número de municipios debido a que al final del 2008 las FARC pusieron en marcha el llamado Plan Renacer que consistió en aumentar su accionar por medio de actividades que eran poco intensivas en la implementación de personal armado (con el fin de evadir los combates directos), tales como la instalación de artefactos explosivos, hostigamientos, ataques con francotirador y contra la infraestructura económica. A partir de lo anterior el Gobierno nacional continuó implementando y fortaleciendo su política de seguridad democrática, lo cual contribuyó a que el Estado volviera a tener ventaja militar con respecto a estos grupos, sin embargo esta política vio su final en el año 2010 cuando el expresidente Álvaro Uribe terminó su mandato, lo que generó nuevamente un aumento progresivo en la presencia y accionar de los grupos armados enfocada en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander y Arauca, que se consideraban atractivos por ser puntos estratégicos en cuanto a movilizaciones y narcotráfico.

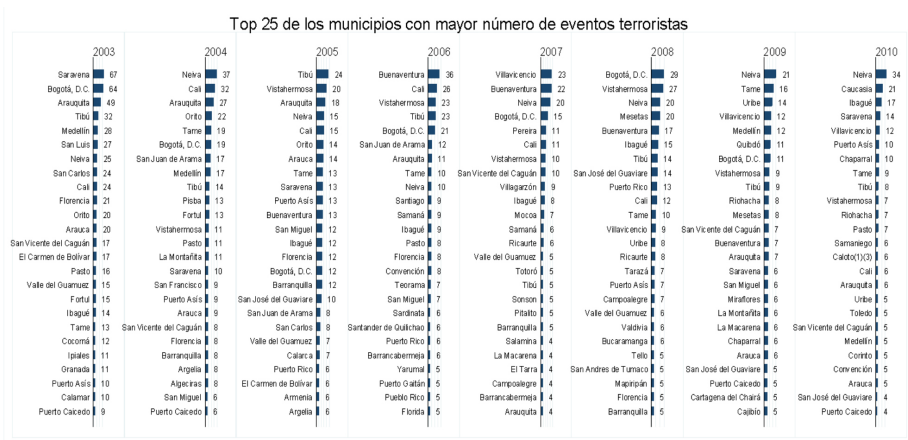
Es así como en la transición del 2011 al 2012 se evidenció un repunte en el accionar de los grupos armados, donde el ELN participó notoriamente, con el fin de mostrarse fortalecido militarmente ante un eventual escenario de negociación con el Gobierno y por la conmemoración de los 50 años de su fundación. Por todo lo anterior, en febrero de este último año el Gobierno nacional puso en marcha el Plan Espada de Honor I que se basaba en una "estrategia de vocación ofensiva e interinstitucional" orientada a debilitar y desarticular las estructuras de las FARC y el ELN y que se enfocó en 10 regiones (La Guajira, Tolima, Meta, Catatumbo, Tumaco, bajo Cauca Antioqueño, Nudo de Paramillo, sur del Valle y norte del Cauca, Arauca, Caquetá y Putumayo), pues estas se caracterizaron por ser aquellas en las que estos grupos (las FARC, y en menor medida el ELN) históricamente han tenido presencia y continúan teniéndola (Prieto et al., p. 17).

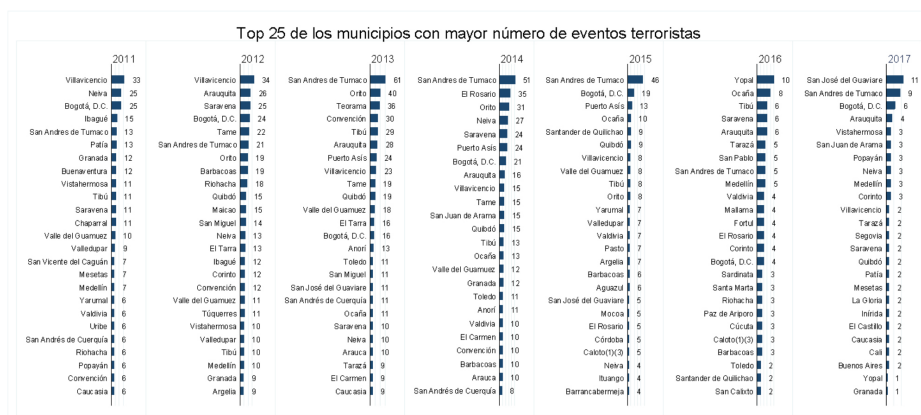
Finalmente, entre 2013 y 2017 se presenta una importante disminución del número de eventos terroristas, la cual es explicada por el inicio de las negociaciones entre el Gobierno en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y las FARC a finales de 2012. No obstante, la política de seguridad de Juan Manuel Santos, no logró disminuir las acciones guerrilleras en algunas regiones (Ríos, 2020). Aunque en menor proporción, se mantienen eventos terroristas principalmente en regiones periféricas del país como Arauca, Norte de Santander, Nariño y Putumayo.

Los escenarios donde se ha desarrollado históricamente el conflicto son el resultado de una construcción social entre las relaciones individuales y su respectivo territorio (Ríos, 2020). En este sentido, las condiciones demográficas, sociales o culturales que caracterizan a los municipios, puede favorecer las actividades de los grupos armados de acuerdo con sus objetivos y estrategias. A lo largo de la historia se ha podido identificar que los municipios mayormente afectados por el conflicto están ubicados en la periferia, caracterizándose por presentar dificultad de acceso, déficit en infraestructura, debilidad política, además de ser lugares selváticos o montañosos.

En la **Figura 3.2** se presenta la evolución de los municipios que a lo largo del periodo 2003-2017 han presentado un mayor número de eventos terroristas. En general, se puede observar que los municipios que han sido más afectados se caracterizan por ser de dominio estratégico para los grupos armados tanto para su movilización, abastecimiento de armamento y provisiones, así como para el transporte de cargamentos de droga, con el fin de darles salida al mar para comercializarse, pues son de vital importancia para el financiamiento de sus actividades ilícitas.

Figura 3.2. *Municipios con mayor número de eventos terroristas durante el periodo 2003-2017*





Fuente: Elaboración propia con base en información del panel de datos del CEDE.

Así pues, para el periodo del 2003-2007 se tiene una ampliación militar entre las fuerzas militares del Estado y las FARC, favoreciendo al primero; lo cual obligó a la guerrilla a replegarse a zonas fronterizas; esto fue posible gracias a la implementación de la Política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe la cual se basaba en planes de recuperación territorial como “el Plan Patriota en 2004 con énfasis en Meta, Guaviare y Putumayo, los Planes Libertad I y II (en 2003 y 2005) en Cundinamarca y Tolima...” (FIP, 2014). Esto conllevó a que las FARC se replegaran a las zonas fronterizas como Putumayo, Nariño, Cauca, Catatumbo en Norte de Santander y Arauca. Además, las FARC perdieron su capacidad para cometer grandes ataques a poblaciones e instalaciones militares, por lo que enfocaron su accionar en eventos que requieren de poca movilización de personal y recursos.

Es así como durante los años 2008-2012 pudo evidenciarse que existió un periodo de transición de la dinámica del conflicto armado en el país, ya que en principio la zona central del país fue aquella en la que más se concentró el accionar de estos grupos armados (los departamentos del Meta y el Huila persisten en gran parte del periodo) y, posteriormente, de acuerdo al alza en el accionar militar del Estado con respecto al guerrillero se da un proceso de descentralización de las acciones, donde estos grupos pasan a ubicarse en la periferia, debido al aumento en la persecución por parte del Estado colombiano.

Los departamentos del Meta y el Huila (municipios de Vistahermosa, Villavieja, Mesetas, Uribe y Neiva) contaron con mayor persistencia en el accionar de estos grupos, debido a que históricamente el Meta ha sido

un corredor estratégico para el comercio de narcóticos y armas desde y hacia el exterior. Según información de la FIP (2013) entre 2007 y 2008, durante el segundo mandato de Álvaro Uribe, las fuerzas militares se concentraron en ubicar a los comandantes del Secretariado de las FARC, donde la organización guerrillera es fuertemente golpeada en el Meta debido al accionar tan destacado en la zona. En ese orden de ideas, el departamento del Huila también ha contado persistencia en cuanto a la afectación por estos grupos, lo cual ha sido asociado con el hecho de que este territorio es conocido como el punto de encuentro o cruce de cuatro corredores estratégicos: el de Sumapaz (comunica la región con los departamentos del Meta y Cundinamarca, y con Bogotá); el de la Amazonía norte (conecta la región con el noroccidente del Caquetá, Meta y la cuenca del Orinoco); el de la Amazonia sur (comunica al Huila con Caquetá, Cauca y Putumayo) y el corredor del Pacífico (comunica a este departamento con el Tolima, Valle y la región del Pacífico) (Vicepresidencia de la República; FIP, 2013). Además, la evidencia data que en los departamentos del Huila y Caquetá se ha contado con presencia de diversos frentes de las FARC que han estado involucrados en varias actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de menores, entre otros.

En consecuencia con lo anterior y teniendo en cuenta la importancia estratégica de estos territorios el Gobierno nacional emprende acciones con el fin de debilitar a estos grupos y dar captura a sus cabecillas, lo cual desencadena una serie de dinámicas entre ambas partes; en el 2008 se ejecuta la Operación Renacer por parte de las FARC, en el 2009, este grupo incrementa su accionar tratando de desconcentrar los esfuerzos militares que se venían desplegando contra sus altos mandos a lo largo de los dos años anteriores, a partir de lo cual se da un repunte de acciones guerrilleras, principalmente en el suroriente y suroccidente del país, donde se encontraban cercadas las estructuras de los comandantes alias el Mono Jojoy y alias Alfonso Cano. Para el año 2011, en Caquetá y Meta, la estrategia de las FARC habría sido la de responder a la lógica de multiplicar los escenarios de confrontación con la Fuerza Pública y desconcentrar la presión militar sobre los comandantes. A partir de 2010, las FARC enfocaron sus esfuerzos en fortalecerse militarmente y en recuperar el territorio perdido, en particular áreas claves para la organización.

Es así como luego de toda esta serie de enfrentamientos y la posterior captura se da un proceso de descentralización de las acciones y pasan a presentarse altos niveles de actos terroristas en municipios pertenecientes a los departamentos de Arauca y Nariño (municipios de Tame, Saravena, Arauquita y Tumaco). El municipio de Tumaco en Nariño, según Prieto et al. (2014) desde mediados del 2011 registró un aumento progresivo de las

acciones armadas guerrilleras, debido a que este territorio se convirtió en uno de los escenarios de mayor importancia para el narcotráfico a nivel nacional y de repliegue de la guerrilla, ya que concentra todas las etapas de la cadena del negocio (cultivo de coca, procesamiento y comercialización de drogas) (Prieto et al., 2014, p. 20). Por otro lado, también se ha tenido en cuenta que en estas zonas por ser fronterizas tradicionalmente han sido escenarios para el desarrollo de actividades ilegales como el contrabando de armas y de gasolina y el tráfico de drogas ha existido poca (casi nula) presencia de Fuerza Pública y una gran dificultad de vigilar la totalidad del paso fronterizo que ha permitido a las guerrillas consolidar zonas de retaguardia desde donde pueden organizar incursiones y ataques hacia el interior del país. Además, allí también ha existido debilidad institucional y niveles de corrupción considerables, los cuales han facilitado el arraigo de estructuras ilegales, permitiendo la malversación de recursos públicos y procesos de intervención con bajos niveles de planeación (Prieto et al., 2014, p. 26).

Tolima entra a ocupar un lugar importante debido a que desde 2010, el que en ese entonces era el comandante de las FARC, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, se movilizó desde el Cañón de las Hermosas en Tolima hacia el Cauca buscando refugio de los operativos de la Fuerza Pública para dar con su paradero. A medida que el Ejército logró traspasar el anillo de seguridad de Cano, el grupo guerrillero incrementó su actividad en el norte del Cauca para distraer la presión de los ataques sobre su jefe, especialmente en los municipios de Caldono, Caloto, Toribío, Corinto y Santander de Quilichao (Prieto et al., 2014). Bogotá ocupa un lugar importante por ser la capital del país, en donde el mayor número de acciones estuvieron enfocadas en la colocación de artefactos explosivos (carros y motos bomba) contra instalaciones de la Policía Nacional.

Con el fin de acabar con el histórico conflicto armado del país, bajo el mandato de Juan Manuel Santos a finales de 2012, se dio inicio a las negociaciones para la firma de un tratado de paz con el principal actor del conflicto, las guerrillas de las FARC. No obstante, en Norte de Santander, Arauca, Nariño y Putumayo, continuaron registrando el mayor número de eventos terroristas, aún después de iniciarse las negociaciones. Como se mencionó anteriormente, la ubicación periférica de estos departamentos y su vínculo con el narcotráfico, fueron los principales factores que definieron la presencia de grupos armados, principalmente de las FARC y, en menor medida, del ELN. Entre 2013 y 2015 se mantiene la actividad armada en el suroccidente del país, en municipios de los departamentos de Nariño y Putumayo. Además de su posición estratégica y la consolidación del Bloque Sur de las FARC, el primero se caracterizó por ser un tradicional bastión de

guerra y el segundo como retaguardia (Ríos, 2020).

Debe señalarse que Puerto Asís y Orito, municipios ubicados en el bajo Putumayo, fueron estratégicos para las finanzas de las FARC por regular el cultivo de coca y su posterior comercialización (FIP, 2014). Además de esto, de acuerdo con Ávila y Torres (2014), en 2013 se registraron acciones de las FARC contra la infraestructura petrolera y energética. En el primer caso, están relacionadas con ataques a oleoductos y quema de carrotanques, como herramientas de sabotaje y medio de presión para llamar la atención del Gobierno, ubicando al departamento en el primer lugar, registrando el mayor número de ataques contra la infraestructura petrolera. En el segundo caso, el municipio de Orito fue el centro de ataques contra la infraestructura energética, a través de la destrucción de postes y torres de energía, por parte del Bloque Sur de las FARC (Ávila y Torres, 2014).

En San Andrés de Tumaco (Nariño), al igual que en el bajo Putumayo, la principal razón para continuar con las acciones violentas, es la economía cocalera, la cual favoreció la financiación de grupos herederos de las FARC (CINEP, 2019). De hecho, fue San Andrés de Tumaco, el municipio que registró mayor número de eventos terroristas entre 2013 y 2015, como se puede observar en la **Figura 2**. En el nororiente del país, en los municipios de Norte de Santander y Arauca, principalmente en los ubicados en la región del Catatumbo, evidencian mayor presencia del ELN. Aun cuando se reducen los niveles de violencia por parte de las FARC por el diálogo de paz, se refleja la presencia de este grupo en algunos municipios de Norte de Santander y Arauca (Ríos, 2020).

En los últimos años del periodo analizado se puede confirmar que los ingresos de las guerrillas se basaron en el negocio del narcotráfico, aumentando de manera importante los cultivos cocaleros (Ríos, 2020). En general se puede observar que son las zonas periféricas del país como el nororiente y el suroccidente del país, resultan más atractivas para las guerrillas, dadas las condiciones y actividades desarrolladas al interior del territorio. Esto se encuentra en línea con lo evidenciado por Ríos (2020), quien plantea que existe una relación entre escenarios fronterizos o periféricos y presencia de economías cocaleras que favorecen las finanzas de las guerrillas.

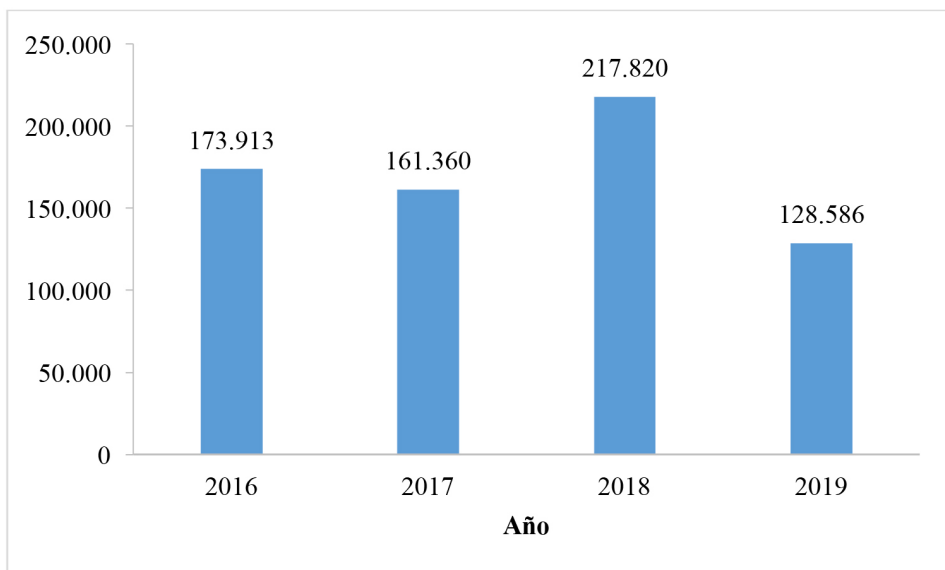
3.2. Caracterización reciente del conflicto

Teniendo en cuenta las diferentes repercusiones que ha tenido el conflicto armado en el país, de las diferentes fluctuaciones a lo largo de su desarrollo y de los diez intentos fallidos de negociaciones (que ha habido

a lo largo de la historia) con los grupos insurgentes por parte del Gobierno nacional en su intento de procurar una mejoría en las condiciones económicas y sociales de la nación; en septiembre del año 2012 el intento número once, a manos del presidente de la época (Juan Manuel Santos), resultó ser exitoso y dio paso al inicio de las negociaciones de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, los cuales iniciaron a mediados de octubre en Oslo (Noruega) y, posteriormente, continuaron en Cuba.

Dicho proceso de negociación tuvo una duración de alrededor de cuatro años y culminó el 26 de septiembre del año 2016, fecha en la cual se firmó el acuerdo cuya finalidad principal fue “Terminar el conflicto armado entre las dos facciones en guerra”. La firma de este pacto dio paso a una nueva etapa en la historia del país: el posconflicto, el cual traía consigo unas expectativas de optimismo, ya que uno de los grupos armados que más perjuicios ha causado, optó por entregar sus armas y reincorporarse a la vida civil; sin embargo, poco a poco se fue evidenciando como dicho panorama se fue entorpeciendo, debido a que no todos los combatientes estuvieron de acuerdo con lo firmado y decidieron continuar su lucha bajo la figura de disidencias o grupos al margen de los acuerdos que continuaron actuando por la vía armada y delictiva, todo lo cual se vio reflejado en la perduración de las cifras de víctimas a lo largo del territorio, tal como se observa en la *Figura 3.3*.

Figura 3.3. *Total de víctimas del conflicto armado en Colombia 2016-2019*



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Unidad de Víctimas.

Es posible apreciar que, a pesar de que las cifras son inferiores a las evidenciadas en la década anterior son considerables teniendo en cuenta que estos años son posteriores a la firma de un acuerdo de paz; sin embargo, el mantenimiento de estos números y su respectivo aumento es explicado por el accionar de las guerrillas que se mantienen activas además de la conformación de las diferentes disidencias que “surgieron en las etapas previas al preagrupamiento de las FARC en diciembre de 2016, y el proceso de dejación de armas que culminó el 27 de junio de 2017” (Álvarez et al., 2018; Garzón et al., 2021). Dichas agrupaciones se han conformado no solo por exguerrilleros de las FARC y se han extendido a lo largo del territorio nacional, según Álvarez et al. (2018) pasaron de contar con solo un grupo en junio de 2016 a tener presencia en 13 departamentos, contar con entre 16 y 18 estructuras y alrededor de 1.200 militantes para el año 2018 (p. 17).

Por su parte, el ELN empezó a fortalecerse al mismo tiempo que las FARC entregaron sus armas, para el año 2017 esta facción contaba con alrededor de 1.800 miembros y una presencia considerable en territorios en los que anteriormente se habían ubicado de manera superficial, es así como las regiones pertenecientes al norte del Chocó y Cauca, costa de Nariño, Buenaventura y el sur de Córdoba pasaron a tener una presencia considerable de dicha agrupación. Por otro lado, fortalecieron estrategias para ocupar con mayor fuerza los territorios en los que tenían presencia compartida con las FARC, tales como Arauca, sur del Chocó y bajo Cauca Antioqueño, realizaron ataques en 23 municipios y empezaron a tener enfrentamientos con la Fuerza Pública como nunca antes en su trayectoria (International Crisis Group [ICG], 2017, p. 7).

Desde mediados del año 2016 y principios del 2017, el Gobierno nacional inició diálogos para la firma de un acuerdo de paz con esta guerrilla en Quito (Ecuador), cuyo hecho más representativo fue el acuerdo entre ambas partes sobre un cese al fuego denominado “Acuerdo y comunicado sobre el cese al fuego bilateral y temporal entre el Gobierno y el ELN, Gobierno de Colombia, 4 de septiembre de 2017”, por medio del cual esta guerrilla se comprometió a poner fin durante un mes a sus acciones bélicas (secuestros, atentados contra la infraestructura, especialmente la petrolera, el reclutamiento de menores de edad y el uso de artefactos explosivos), mientras que el Gobierno se encargaría de brindar garantías con respecto al derecho a la protesta, la protección de líderes sociales, militantes encarcelados y mantener reuniones con los miembros vinculados al proceso de paz.

Sin embargo, en los últimos años dicho grupo se ha ido incorporando cada vez más a las actividades del narcotráfico y, a pesar de que se descubrieron

y destruyeron laboratorios de cocaína de propiedad de dicha agrupación, esta se ha vinculado cada vez más con respecto al comercio de alucinógenos de mayor valor a partir de sus actividades en los territorios de Cauca, Catatumbo y Chocó, de los cuales en los dos últimos territorios ha tenido una cantidad considerable de enfrentamientos con otros grupos al margen de la ley (ICG, 2017).

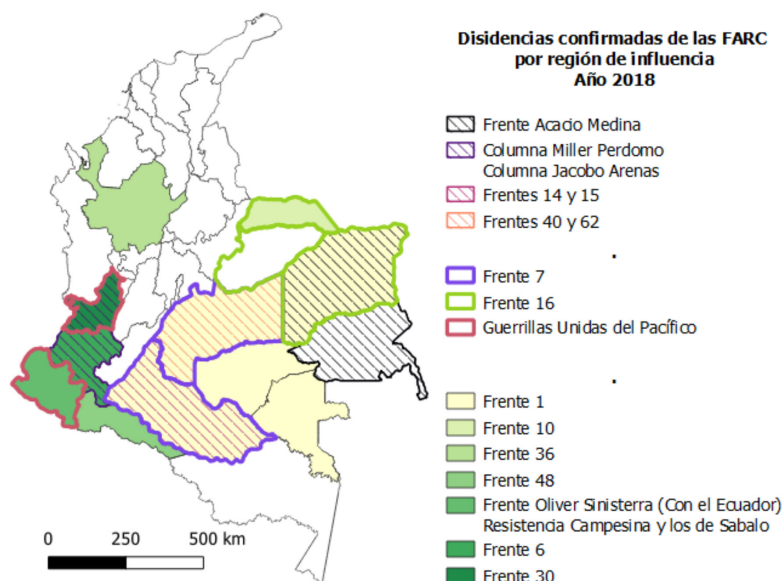
Así mismo, el ELN se ha enfocado en la conservación de territorios estratégicos para su accionar, tales como la región de Arauca en su frontera con Venezuela donde aplica sus propias leyes e ideologías y orienta la actividad económica hacia el narcotráfico; del mismo modo se ha enfocado en fortalecer su aparato militar con una única finalidad defensiva “donde el objetivo ya no sea ganar la guerra. Resistir basta para justificar su existencia, afirma el ELN” (ICG, 2017, p. 8).

Por otro lado, las disidencias pueden definirse como aquellas agrupaciones de carácter marginal que se han conformado a raíz de las divergencias existentes entre sus miembros con respecto a las decisiones tomadas ante el panorama de negociación. Sin embargo, la conformación de estos grupos también ha estado influida por incentivos de carácter económico, las políticas contrainsurgentes implementadas por el Gobierno nacional, las dinámicas de paz y respaldo social, además de los cambios en el liderazgo de los grupos (comandantes de gran importancia para los militantes han optado por unirse a estos grupos, incentivando a más a unirse a dicha causa). Por otro lado, algunos exguerrilleros que se adhirieron a los acuerdos, posteriormente, se unieron a las disidencias como resultado de la falta de “garantías de seguridad” por parte del Estado, lo cual puso en evidencia la vulnerabilidad de quienes se sometieron a lo firmado con respecto a los grupos al margen que están en la capacidad de entorpecer la implementación de los acuerdos, vulnerar las condiciones de seguridad en los escenarios urbano y rural, y robustecer las economías criminales (Álvarez et al., 2018).

Se trata de estructuras armadas que —con sus respectivas dimensiones, rasgos y variaciones—, pueden competir en el plano militar, político y social de forma directa a la acción del Estado y sabotear sus esfuerzos para la construcción de la paz o los anhelos de quienes sí dejaron las armas. (Álvarez et al., 2018, p. 12)

En ese orden de ideas, a partir del proceso de expansión y las dinámicas de estas facciones, Álvarez et al. (2018) resumen el establecimiento de estos grupos a lo largo del territorio en medio de dos grandes regiones, la Oriente – Sur y la macro-región de Occidente, dentro de las cuales para 2018 se establecieron alrededor de 16 grupos, tal como se observa en la *Figura 3.4*.

Figura 3.4. *Disidencias de las FARC confirmadas por región de influencia, año 2018*



Fuente: Elaboración propia a partir de información de Álvarez et al. (2018).

El *frente 1*, que abarca la región de los departamentos de Meta, Guaviare, Vaupés, Vichada y Caquetá, ha sido un escenario en medio del cual se ha recrudecido el conflicto de manera considerable, el accionar de este frente ha sido contundente y han predominado acciones como homicidios, la instalación de minas antipersona, amenazas, retenes ilegales, secuestro, reclutamiento forzado, deforestación, entre otras. El *frente 7*, que abarca el sur del Meta y el Caquetá, también ha contado con un accionar considerable y ha sido el epicentro de acciones como el reclutamiento forzado, secuestro, quemas (de vehículos y maquinaria de fabricación), retenes ilegales y desplazamiento forzado. Así mismo, el *frente 10*, ubicado en el departamento de Arauca, se ha enfocado en realizar atentados terroristas contra desmovilizados de las FARC.

En ese orden de ideas, los *frentes 14 y 15*, con presencia en el Caquetá, se enfocaron en lucrarse a partir del establecimiento de retenes ilegales, mientras que la fabricación y tráfico de estupefacientes, seguidos de diferentes acciones violentas con el fin de garantizar dicha actividad, ha sido el mayor accionar de los *frentes 40 y 62* (Meta), *48* (Putumayo), Acacio Medina (Guainía, Vichada y frontera con Venezuela), Oliver Sinisterra (Nariño y Ecuador), *6* (Cauca), Resistencia Campesina y Los de Sabalo (Nariño),

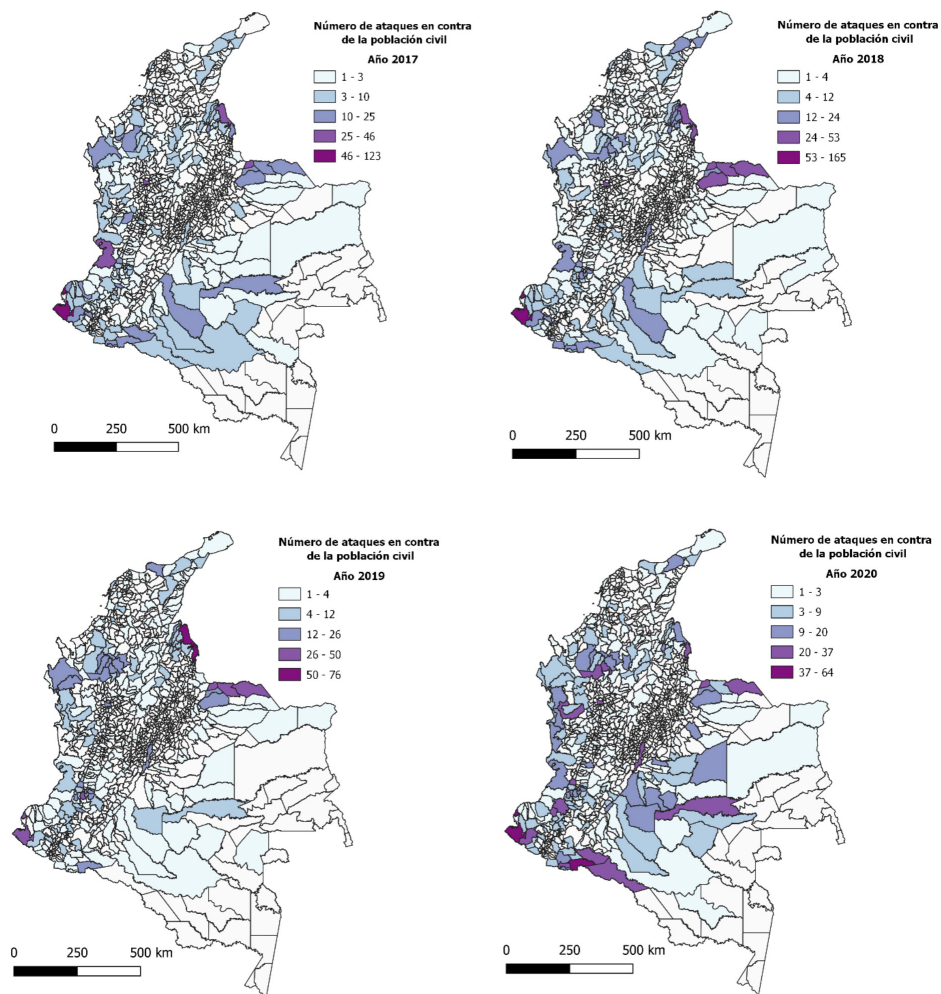
Guerrillas Unidas del Pacífico (Nariño y Valle del Cauca), Columna Miller Perdomo y Jacobo Arenas (Cauca, Valle del Cauca); mientras que el *frente 30* (Valle del Cauca), *16* (Vichada, Casanare, Arauca) y, *36* (Antioquia) se han enfocado en acciones como robos y enfrentamientos con las autodefensas (Álvarez et al. 2018, p. 26).

Todos estos grupos tienen un común denominador asociado a la forma de robustecer sus filas, los cuales están asociados a la contratación de estructuras criminales, reclutamiento forzado y toma de territorios y corredores abandonados por las FARC luego de la firma de los acuerdos; todo lo cual permitió un proceso de expansión acelerado y que su accionar tuviese efectos contundentes. Sin embargo, no solo los grupos disidentes se han centrado en apoderarse de sectores periféricos y estratégicos del territorio, el ELN y los grupos criminales organizados también se han enfocado en ocupar territorio que les permitan fortalecer sus niveles de organización interna, capacidad militar, recursos económicos y capital político, ICG (2017).

Por otro lado, según el ICG (2017) existen otros dos grupos armados que han estado activos durante los últimos años en el territorio nacional, en primer lugar se encuentran los gaitanistas, cuyas principales actividades se orientan hacia el narcotráfico, la minería ilegal de oro, las extorsiones y, se han enfocado en ocupar territorios pertenecientes al Urabá, sur de Córdoba y Bolívar, el Chocó y, bajo Cauca Antioqueño, bajo la figura de combatientes armados; del mismo modo y bajo la figura de delincuentes subcontratados mantienen acciones en las regiones pertenecientes a los departamentos de Nariño, Antioquia, la costa Atlántica y la frontera con Venezuela. En segundo lugar, se encuentra el frente Libardo Mora Toro del EPL, que para mediados de 2017 contó con alrededor de 200 militantes y cuyas operaciones evidenciaron procesos de expansión hacia la región del Catatumbo (partes de Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Abrego) y la frontera con Venezuela.

En ese orden de ideas y ante el repunte de actividad en el último lustro, el Gobierno nacional ha puesto en marcha los planes “Victoria” y “Comunidades seguras”, los cuales se basan en la ampliación del control territorial por parte de la policía y el ejército a través de “la incorporación de los conceptos como: áreas de atención prioritaria, estabilización y consolidación, factores de inestabilidad, control institucional del territorio, acción unificada, liderazgo integrado” (Cook, 2017, párr. 3); todo lo cual ha desencadenado diferentes respuestas por parte de los grupos armados en sus áreas de influencia en especial con ataques contra la población civil, tal como se observa en la *Figura 3.5* que evidencia el número de ataques contra la población civil a nivel municipal para los años 2017 a 2020.

Figura 3.5. *Número de ataques contra la población civil a nivel municipal 2017-2020*



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs).